



Columna

Jefa de Operación Social de Hogar de Cristo en Antofagasta

Vinka Bonilla



Antofagasta: sin reingreso, la exclusión sigue

La deserción escolar no parte cuando un estudiante desaparece de la lista. Parte antes: cuando faltar se vuelve costumbre, cuando la sala deja de ser un lugar habitable, cuando la escuela, en vez de sostener, expulsa. Por eso, para hablar en serio de deserción en Antofagasta, primero hay que mirar su antesala: el ausentismo.

Entre marzo y septiembre de 2025, la región registró una asistencia acumulada de 85,7%, bajo el promedio nacional de

“Hoy, nuestra región necesita con urgencia que el reingreso deje de depender de fondos concursables”.

87,8%. Más grave todavía: 32,5% de sus estudiantes presentó inasistencia grave o crítica, por sobre el 26,5% del país. En 2024 esa cifra fue 34,5% y en 2023, 35,4%. Hay una mejora, claro. Pero cuesta celebrarla cuando uno de cada tres estudiantes sigue faltando de manera severa. Más todavía si, en 2024, Antofagasta cerró con una tasa de desvincula-

ción escolar de 1,86%, una de las más altas del país y superior a la de 2023. O sea: aquí la alerta no terminó. Cambió de forma, pero sigue ahí.

Desde Súmate del Hogar de Cristo lo hemos dicho con claridad: detrás de estas cifras hay trayectorias quebradas. Jóvenes que salieron debido a la pobreza, la violencia, la salud

mental herida, la sobrecarga familiar, la migración, el consumo problemático y una experiencia escolar que muchas veces humilla más de lo que acompaña. Nuestra Cartografía Social 2024 advirtió que cerca de 227 mil niños, niñas y adolescentes han interrumpido su trayectoria educativa sin completar su escolaridad obligatoria. A eso se suma otro dato brutal: entre 2023 y 2024, más de 47 mil estudiantes abandonaron sus estudios.

En Antofagasta, además, esta discusión no puede separarse del clima de violencia que atraviesa hoy a las comunidades educativas. En 2025, la Superintendencia de Educación recibió 22.680 denuncias, y 75,3% correspondió a convivencia educativa. El dato ya es duro. La realidad, más todavía.

En Calama, el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta terminó con una inspectora muerta y otras cuatro personas lesionadas. Y eso ocurrió aquí, en esta región. Entonces cuesta pedir asistencia, concentración o “compromiso escolar” como si la escuela siguiera siendo, por definición, un lugar seguro. Para muchos niños, niñas y adolescentes, dejó de serlo hace rato.

Hoy, nuestra región necesita con urgencia que el reingreso deje de depender de fondos concursables y tenga financiamiento estable por ley. Lo decimos con claridad: una segunda oportunidad que se financia año a año no es una política pública, es una promesa frágil. Y en una región donde la inasistencia ya viene avisando y la violencia ya dejó marcas brutales, esa fragilidad también expulsa.